



GACETA DE PUERTO-RICO.

AÑO 1866.

SABADO 22 DE SETIEMBRE

NUM. 114.

PARTE OFICIAL.

DIRECCION DE ADMINISTRACION LOCAL

DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla con fecha primero de Agosto último, la Real orden que sigue.

Excmo. Sr.—El Presidente del Consejo de Ministros dice al Sr. Ministro de Ultramar en 30 de Julio último lo que sigue.—Dada cuenta á la Reina (q. D. g.) del expediente instruido en el Ministerio de Hacienda con motivo de una instancia elevada por el Comandante retirado de Infantería de Marina D. Francisco Oteo de Tejada en que manifiesta que de aplicar á la letra las disposiciones que rigen respecto á la imposición del descuento gradual á las clases que cobran del Tesoro, la dotación que disfruta queda reducida á una cantidad menor que la que percibirán otros que por gozar de menor sueldo, se hallan comprendidos en distinto tipo del referido descuento, penetrada S. M. de la justicia de esta reclamación y deseosa de que las prescripciones del párrafo segundo del artículo primero de la ley de treinta de Junio último y Real Decreto de cuatro del actual, se apliquen con toda la equidad que el caso requiere, de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Contabilidad y con el parecer del referido Ministerio se ha servido disponer que en la imposición del descuento se observen como reglas generales las siguientes.—Primera.—Siempre que la imposición del descuento sobre alguna de las dotaciones comprendidas en un grupo de la escala que establece el Real Decreto de cuatro de este mes, ofrezca un haber líquido inferior al que produzca la liquidación sobre el límite del grupo inmediato anterior, se hará solo el descuento del tanto por ciento fijado para este.—Segunda.—En aquellas dotaciones que á consecuencia del descuento hubieren de quedar reducidas á una cantidad menor de seiscientos escudos, se hará el descuento solo de la suma en que excedan de los referidos seiscientos escudos.—De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”

Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. E. en acuerdo con esta Dirección, se inserta en este periódico oficial para general conocimiento. Puerto-Rico 17 de Setiembre de 1866.—Miguel Alvarez Mir.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla con fecha veinte de Agosto último la Real orden que sigue.

Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de Estado dice al de Ultramar en 16 del actual lo que sigue.—En respuesta á las Reales órdenes que V. E. se sirvió comunicarme en 13 y 19 de Julio último trasmitiendo los informes pedidos al Gobernador Superior Civil de la Isla de Puerto-Rico acerca de D. Francisco Cooper y Mr. Lebrun, propuestos para Vice-cónsules de la Gran Bretaña y de Francia en la Isla de Vieques, he de merecer de V. E. se sirva manifestar á la referida autoridad Superior que S. M. en vista de los fa-

vorables informes comunicados sobre dichos sujetos, se ha servido autorizarle para que les admita al ejercicio de sus funciones con arreglo á las disposiciones vigentes en la materia.—De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Y de la de S. E. se inserta en este periódico para conocimiento general. Puerto-Rico 20 de Setiembre de 1866.—Miguel Alvarez Mir.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla, con fecha 15 de Agosto último, la Real orden que sigue.

Excmo. Sr.—Por el Ministerio de Estado se dice á este de Ultramar en 13 del actual lo siguiente.—De orden del Sr. Ministro de Estado tengo la honra de remitir á V. E. para su conocimiento y efectos que estime convenientes doce ejemplares de cada uno de los convenios de extradición celebrados con Wurtemberg y con el Gran Ducado de Oldemburgo.—De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes, con inclusión de dos ejemplares de cada uno de los Convenios de extradición á que se hace referencia.

Y los convenios á que se refiere el anterior inserto, dicen así:

Convenio para la recíproca extradición de malhechores entre España y el Gran Ducado de Oldemburgo, firmado en Franefort sobre el Main el 3 de Junio de 1864.

S. M. la Reina de las Españas y su Alteza Real el Gran Duque de Oldemburgo, considerando oportuno regularizar la extradición de malhechores por medio de un Convenio, han dado con este objeto sus plenos poderes.

S. M. la Reina de las Españas á D. Juan Antonio de Rascon, Doctor en jurisprudencia, Caballero Gran Cruz de la Real Orden española de Isabel la Católica y de la de Felipe el Magnánimo de Hesse, Comendador de la Orden Constantina de San Jorge de Parma, y su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de la Serenísima Confederación Germánica; y su Alteza Real el Gran Duque de Oldemburgo al Sr. Guillermo de Eisendeher, Doctor en Derecho Gran Comendador de la Orden de la Casa Gran Ducal, y de Mérito de Oldemburgo, Gran Cruz de la de la Casa Ernestina de Sajonia, de la Gran Ducal del Halcon de Sajonia, de la Orden Ducal de Alberto de Anhalt, Comendador de primera clase de la del Aguila Roja de Prusia, Comendador y Caballero de varias Ordenes, Consejero privado y su Enviado á la Dieta Germánica, los cuales, despues de haberse comunicado sus plenos poderes, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.º—Los Gobiernos de España y de Oldemburgo se obligan por el presente Convenio á entregarse recíprocamente todos los individuos, con excepción de sus propios súbditos, que por los delitos enumerados en el art. 2.º hayan sido encausados, contra quienes se hubiese dictado auto motivado de prisión ó sentenciados por los Tribunales que sean competentes con arreglo á las leyes del país que solicite la extradición, y que de Oldemburgo se hayan refugiado en España ó sus provincias de Ultramar, ó de España y sus provincias de Ultramar en Oldemburgo.

Artículo 2.º—La extradición será con-

cedida por los crímenes y delitos enumerados á continuación:

1.º El homicidio, el infanticidio y el aborto.
2.º El incendio.
3.º La violacion y el abuso deshonesto con persona de uno ú otro sexo, cuando se use con ella de fuerza ó intimidacion, ó cuando se halle privada de razon ó de sentido, ó cuando su edad diere al abuso el carácter de delito grave segun las legislaciones respectivas, aunque no concurra ninguna otra de dichas circunstancias.

4.º El robo, el hurto cometido por criado ó dependiente asalariado, y la sustraccion efectuada por depositarios instituidos por Autoridad pública de efectos, que por razon de su cargo, se hallasen bajo su custodia.

5.º La estafa.

6.º La fabricacion, introduccion ó expedicion de moneda falsa, de papel moneda y de billetes de Banco ó de instrumentos para fabricarlos; la falsificacion ó alteracion del papel moneda; la emision ó introduccion del papel moneda falsificado ó alterado; la falsificacion de los punzones ó sellos con los cuales se contrastan el oro y la plata; la falsificacion de los sellos del Estado y de toda clase de papel sellado.

7.º El falso testimonio y la presentacion de testigos falsos en juicio.

8.º La falsedad cometida en instrumentos públicos ó privados y en los de comercio.

9.º La quiebra fraudulenta y el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores.

10. El cohecho ó soborno de empleados del Estado y de jurados, comprendiéndose bajo la denominacion de este delito, tanto el hecho del soborno como el del sobornante. Se reputa empleado todo el que desempeña un cargo público, aunque no sea de nombramiento del Gobierno, ni reciba sueldo del Estado.

Para que la extradición se conceda por alguno de los motivos expresados anteriormente, no es necesario que el delito se haya consumado; procederá tambien por el conato de ejecucion ó la tentativa de delito. No solo pueden ser reclamados el autor y el cómplice, sino tambien el encubridor del delito; pero esto solo cuando haya sido penado ya dos ó mas veces por encubrimiento.

Cualesquiera que sean el delito y la especie de responsabilidad del culpable, la extradición tendrá lugar únicamente en el caso de que la accion punible exija la aplicacion de una pena que no baje de dos años de prisión con arreglo á las leyes del Estado del cual se reclama la entrega.

Artículo 3.º—Las disposiciones del presente Convenio no podrán aplicarse á individuos que fueren culpables de cualquier delito político.

La extradición de tales individuos no podrá verificarse sino para la averiguacion y el castigo de los crímenes y delitos comunes encausados en el art. 2.º de este Convenio.

Artículo 4.º—La extradición no tendrá lugar cuando hubiese trascendido el término de prescripción de la instancia ó de la pena con arreglo á las leyes del país del cual se solicita la entrega.

Artículo 5.º—Cuando el individuo reclamado estuviere perseguido por un crimen ó delito cometido contra las leyes del país del cual se solicita la extradición, deberá diferirse su entrega hasta tanto que haya cumplido su condena. Lo mismo se observará cuando al recibirse la demanda de extradición, el individuo reclamado se hallase preso en virtud de sentencia por deudas anteriores á la comision del delito.

Art. 6.º—Cuando el sentenciado ó encausado, cuya extradición se reclama, no fuese súbdito del Estado reclamante, sino de otro tercer estado, el país del cual se solicita la entrega tendrá derecho de no acceder á la demanda hasta que el Gobierno á que perteneciere el individuo haya sido consultado y puesto en situacion de dar á conocer las razones que pudiera tener para oponerse á la extradición.

En todo caso el Gobierno del cual se solicita esta, quedará libre de negarla dando á conocer los motivos al Estado que la reclama.

Art. 7.º—La extradición deberá solicitarse por la vía diplomática, y solo será concedida en vista del original ó de la copia legalizada de la sentencia, ó de un documento relativo á la condenación ó al estado del proceso ó del auto preliminar de prisión, comunicado en la forma prescrita por la legislación del Gobierno reclamante, que exprese el crimen ó delito de que se trata y la pena que le sea aplicable.

Art. 8.º—Todos los efectos robados que se encuentren en poder del individuo reclamado, y todos los que sirvan para la comprobacion del delito, serán entregados al mismo tiempo que el delincuente. Serán igualmente entregados todos estos efectos, si el delincuente los hubiese escondido ó depositado en el país donde se haya refugiado, y se hallaren ó descubriesen en lo sucesivo.

Art. 9.º—Los gastos de arresto, de la manutencion y del transporte del individuo cuya extradición haya sido concedida, serán sufragados por ambos Estados dentro de los límites de sus respectivos territorios. Los gastos de la manutencion y transporte por el de los países intermedios, serán de cuenta del Estado que reclama la entrega.

En el caso que se prefiera el transporte por agua, el individuo reclamado será trasladado al puerto que el Agente diplomático ó consular, acreditado por el Gobierno que solicita la extradición designe. El embarque será de cuenta del mismo Gobierno.

Si en una causa criminal se creyese útil ó necesaria la confrontacion de criminales que se hallen presos en el otro Estado, ó tambien la comunicacion de objetos ó documentos que pudiesen servir de prueba y estuviesen en poder del otro país, se presentará la demanda oportuna por la vía diplomática, á la cual se accederá en el caso que ninguna consideracion particular se oponga á ello, y obligándose á devolver los criminales y los objetos de prueba.

Ambos Gobiernos renuncian recíprocamente al abono de los gastos ocasionados por el transporte y devolucion de los criminales confrontados en los límites de sus respectivos territorios, así como por el envío y devolucion de las pruebas y documentos.

Art. 10.—Si en el espacio de cuatro meses para los individuos que se refugien á las provincias europeas de España, ó en Oldemburgo, y dentro de seis meses para los refugiados en las provincias españolas de Ultramar, á contar desde el día en que dichos individuos sean puestos á disposicion del Gobierno reclamante, éste no se hubiere hecho cargo de ellos, podrá efectuarse su suelta y negarse su extradición.

Art. 11.—Reservanse las Altas Partes contratantes determinar de comun acuerdo las formalidades que se hayan de observar para la entrega de los reos, los puntos convenientes para ésta en ambos países, y mas circunstanciadamente las otras medidas conducentes á la ejecucion del presente Convenio.

Art. 12. Cuando para la instruccion de una causa criminal uno de los dos Gobiernos creyese necesario oír las declaraciones